
PROGRAMA OCDE





3
00073/17

FOLIO
Nº 1

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 20 DIC 2017

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/RES/70/1, A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N° 1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010, en la 10º Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, y la A/HRC/RES/17/4, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO

Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "**Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030**", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa Agenda, por parte del Estado Nacional.

Que, el Programa tiene como finalidad efectuar, periódicamente, un seguimiento y evaluación acerca de las políticas públicas nacionales que se llevan delante de aquí al 2030, colaborando con la elaboración de informes anuales.

Que, en ese sentido, el 25 de enero de 2017 se creó el "**Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal**", en pos de cumplir con lo que el Consejo de Derechos Humanos señala en el punto 17 de la Res. A/HRC/33/L.17/ Rev.1: "Reconoce el importante papel que desempeñan las instituciones nacionales de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos, incluido su mecanismo de examen periódico universal, tanto en la fase de preparación como en la de seguimiento, y los procedimientos especiales, así

dz

yy

como su colaboración con los órganos de tratados de derechos humanos de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 de marzo de 2006, y 65/281, de 17 de junio de 2011, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007, y 19/119, de 22 de marzo de 2012, y la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005”.

Que, a su turno, el 28 de marzo de 2017 se creó el “**Programa GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible**”, (Global Alliance of National Human Rights Institutions, es decir, Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos).

Que, a fin de cumplir con todos esos compromisos, nuestra INDH creó una serie de *Programas* que se nutren y vinculan mutuamente con los resultados que se van obteniendo para luego ser informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales.

Que el 3 de febrero de 2017 se creó el “**Programa sobre las empresas y los derechos humanos**”.

Que el 26 de junio de 2017 se creó el “**Programa de Salud y derechos humanos**”.

Que el 30 de junio de 2017 se creó el “**Programa sobre el Medio Ambiente y los derechos humanos**”.

Que, en virtud de lo expuesto, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.

Que así, y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría, conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los “Principios de París” adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU



**DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPÚBLICA ARGENTINA**

por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y demás tratados y convenciones internacionales.

Que la dinámica de los *Programas* demostró que la creación de cada uno de ellos nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un marco estratégico al seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con resultados fructíferos para unos y otros, en beneficio de todas las personas que habitan nuestro país.

Que la Resol. A/RES/48/134 de la Asamblea General, recuerda que en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se reafirmó el importante papel que desempeñan las INDH, en particular en lo que respecta a su capacidad para asesorar a las autoridades y a su papel en la reparación de las violaciones a los derechos humanos. En aquella Declaración y Programa de Acción de Viena, Resol. A/CONF157/23 (1993), se afirmó: "*100 ... las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, podrán presentar al Secretario General de las Naciones Unidas sus opiniones acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Declaración. Se debe prestar especial atención a la evaluación de los progresos logrados para alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y protocolos internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del sistema de las Naciones Unidas*". Argentina adoptó y ratificó la Declaración y Programa de Acción de Viena.

Que, en este contexto, se decide por la presente crear el "**Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos**", en función de los lineamientos que se indicarán a continuación.

Que Argentina adhirió a la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE en 1997, por lo que nuestro país resulta signatario de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que son parte de aquel instrumento.

Que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (LDEM) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos, y que si bien no son vinculantes, constituyen el único código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los gobiernos se han comprometido a promover.

Que el 4 de mayo del año 2010 los gobiernos de los países adherentes de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales comenzaron a negociar la actualización de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE; y como resultado de ese proceso, se acordó la incorporación de nuevas materias, ordenadas en sucesivos capítulos, que corresponden a derechos humanos, empleo y relaciones laborales, igualdad de género, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad y publicación de informaciones.

Que para el cumplimiento de sus fines, los gobiernos se comprometieron a establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) con la misión de promover las Directrices y actuar como un foro de discusión para todos los asuntos relacionados con ellas, realizando, además, actividades de promoción, atendiendo consultas y contribuyendo a la resolución de las cuestiones que surjan en relación con la implementación de las Directrices en instancias específicas.

Que, en este marco, por Resolución N° 17 de fecha 25 de enero de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estableció como funciones del Punto Nacional de Contacto "*promover la vigencia de las Directrices de la*



00073 / 17

FOLIO
Nº 3

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales y contribuir a la resolución de asuntos vinculados con la implementación de las mismas".

Que dicha Resolución estableció que el Punto Nacional de Contacto OCDE funcionara en el ámbito de la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, dependiente de la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales, de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales, de la Cancillería.

Que a la citada Dirección también le corresponde intervenir en el tema de la responsabilidad social empresaria, en el marco de las referidas Directrices.

Que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el punto 6 de su Resolución 17/4 del 6 de julio de 2011 (A/HRC/RES/17/4), estableció un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, para que, entre otros asuntos: "*h) Establezca un diálogo sistemático y analice los posibles ámbitos de cooperación con los gobiernos y todos los interlocutores pertinentes, incluidos los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados, los fondos y los programas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Pacto Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, así como con las empresas transnacionales y otras empresas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los representantes de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales regionales y subregionales.*"

Que, dada su importancia, al menos otras resoluciones de las Naciones Unidas merecen ser citadas; por ejemplo, la A/HRC/32/45, del 4 de mayo de 2016; la A/HRC/35/33, del 24 de abril de 2017; la A/HRC/35/33, del 25 de abril de

2017; y la A/72/162*, del 18 de julio de 2017; así como las recomendaciones elaboradas con fecha 30 de junio de 2017, por el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, en relación a la Agenda 2030,

Que, se insiste con lo indicado oportunamente, en cuanto a que nuestra Institución creó el **Programa sobre las empresas y los derechos humanos**, teniendo en cuenta, entre otras observaciones, el Trabajo Conjunto elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, en representación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comité Internacional de Coordinación (ahora GANHRI), en colaboración con la Secretaría de las Directrices de la OCDE y con contribuciones de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.

Que, allí se indica: “*Los PNC proporcionan un foro importante para la comunicación y para tratar cuestiones relativas a las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. Las INDH y otras partes interesadas, incluidos los propios PNC, pueden cooperar para garantizar el acceso a recursos cuando las denuncias presentadas a los PNC alegan violaciones de los derechos humanos por empresas.*”.

Que, agrega: “*En octubre de 2010, las INDH adoptaron la Declaración de Edimburgo sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta Declaración establece claramente el compromiso conjunto contraído por las INDH para fomentar una mejor comprensión y un mayor respeto de los derechos humanos en las operaciones comerciales. En particular, la Declaración alienta a las INDH a considerar asociaciones entre INDH y Redes locales del Pacto Mundial, al igual que a establecer vínculos con los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.*”.

Que, por otro lado entiende que “*Los PNC se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias y reportar al Comité de Inversión de la OCDE. Esto ofrece a los PNC una oportunidad de presentar informes anuales; debatir actividades para promover las Directrices en la agenda proactiva; participar en*



**DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA**

evaluaciones de aprendizaje entre pares; comparar las lecciones aprendidas sobre cuestiones específicas; fortalecer los esfuerzos de colaboración y celebrar consultas con representantes de empresas, sindicatos, ONG, organizaciones internacionales e INDH.”.

Que, a más de lo expuesto, y como antecedentes, es del caso poner de resalto que en el año 2012, la OCDE y el CIC (reitero, ahora GANHRI) firmaron un Memorando de Entendimiento en Ammán, Jordania, en el marco de la XI Conferencia Bienal del CIC.

Que el propósito del Memorando de Entendimiento fue establecer un programa de cooperación para promover la comprensión, la visibilidad y la utilización de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales junto con el Mandato de los Principios de París de las INDH, en pro de un mayor respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

Que en dicho Memorando se dispuso: “*Se incluye aquí la utilización de las sinergias entre la OCDE y los PNC, por una parte, y el CIC y las INDH, por otra, por ejemplo mediante: la referencia a los instrumentos, las funciones y el trabajo pertinentes mutuos; la participación conjunta en eventos de relación mundial; el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades entre los PNC y las INDH; los conocimientos especializados sobre derechos humanos y la diligencia debida y el diálogo continuo.”.*

Que no caben dudas que los PNC y las INDH pueden tener conocimientos complementarios pertinentes para la promoción del respeto de los derechos humanos por las empresas, teniendo en cuenta que los PNC son responsables de las Directrices de la OCDE y la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos humanos.

Que el citado Memorando da cuenta de una serie de acciones positivas que las INDH y los PNC deberían llevar adelante en beneficio del cumplimiento de las Pautas de la OCDE, a saber:

JR

a. "Las INDH del Estado de origen pueden contribuir a las acciones de los PNC para promover el aprendizaje en el ámbito nacional entre las empresas y otras partes interesadas sobre las Directrices de la OCDE. Algunas INDH son expertas en temas específicos de empresas y derechos humanos; un ejemplo es la evaluación de las repercusiones sobre los derechos humanos, la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo, la contratación pública socialmente responsable y los derechos laborales. Mantener un diálogo periódico entre los PNC y las INDH permite promover el intercambio de información pertinente para definir la diligencia debida en contextos determinados. Los PNC participan actualmente de forma activa en los proyectos de "agenda proactiva" del Comité de Inversión de la OCDE sobre diligencia debida en el sector financiero y la participación de las partes interesadas en la industria extractiva.".

b. "Las INDH pueden tener competencias jurídicas en sus países para tramitar las denuncias, actuar como instancia de mediación y conciliación o para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, según las leyes en virtud de las cuales hayan sido creadas. Los PNC y las INDH deben conocer sus mutuos mandatos sobre atención de denuncias y examinar la coordinación de sus actividades.".

c. "Las INDH y los PNC pueden, por lo tanto, colaborar entre sí para elaborar plataformas que sirvan para proporcionar información, publicaciones y herramientas sobre cuestiones de empresas y derechos humanos para compañías y otras partes interesadas. Asimismo, pueden organizar conjuntamente eventos públicos para estimular la sensibilización y el compromiso entre las empresas y las comunidades en materia de sostenibilidad.".

Que resulta de sumo interés tener en cuenta que el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) es la institución nacional de derechos humanos de Dinamarca, y en el año 2011, durante la comparecencia de Dinamarca en el Primer Ciclo de la Revisión Periódica Universal (EPU) ante el Consejo de

11
00073/17FOLIO
Nº 5

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

Derechos Humanos de la ONU, recomendó que su país revisara los acuerdos relativos a los PNC y “se asegurara de que el PNC danés cumpliera todos los criterios principales de los PNC conforme a las Directrices de la OCDE, y todos los criterios de los mecanismos no judiciales de quejas conforme al Anteproyecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”.

Que, a su turno, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, solicita a los países miembros y no miembros que posibiliten una rendición de cuentas eficaz; y en su punto 12, expresamente indica que se debe reforzar el papel de la supervisión y control externos en el sistema de integridad del sector público, en concreto: “a) facilitando el aprendizaje organizacional y garantizando la rendición de cuentas de las entidades del sector público proporcionando respuestas adecuadas (incluso aplicando medidas correctivas, cuando proceda) a las sanciones, decisiones y asesoramiento formal de los órganos de supervisión (tales como las entidades superiores de auditoría, el defensor del pueblo o las comisiones de información), los organismos de reglamentación y aplicación y los tribunales administrativos”.

Que, no resulta ocioso recordar que nuestro país presentó un *Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017*, solicitando, formalmente, su ingreso a la organización como miembro pleno o socio estratégico.

Que dicho Plan fue estructurado alrededor de 3 categorías principales: “aumentar la participación en los Comités de la OCDE; adherir a instrumentos claves de la organización; llevar a cabo estudios de políticas públicas”.

Que, en el presente, la Argentina participa en distintos órganos de la OCDE, con diferente grado de institucionalidad, tales como: el Comité de Asuntos Fiscales, el Comité de Comercio, el Comité de Agricultura, el Comité de Pesca, el Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, el Centro de Desarrollo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno, el Comité de Inversiones, entre otros.

Que en la actualidad Argentina espera la invitación formal de la OCDE, honrando los compromisos asumidos y los comprometidos para los próximos años, con la finalidad de lograr la aprobación definitiva de su ingreso por parte de los 35 países que actualmente son miembros de la OCDE.

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó el denominado Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), y en su Eje Nº 5 “Cultura Cívica y Compromiso con los Derechos Humanos”, más precisamente en su punto 5.6. “Derechos Humanos y Empresas”, señala textualmente que le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos *“Contribuir al diseño e implementación ... de guías y protocolos de acción en el marco de instrumentos internacionales como los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad.”*, siendo su meta la elaboración y realización de cinco (5) protocolos y guías de actuación.

Que, así pues, el ***“Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”***, tendrá por finalidad: **a.** Establecer un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los derechos humanos; **b.** Promover y proteger los derechos humanos estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y **c.** Cooperar con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.

Que la dirección y supervisión general del *Programa* quedará a cargo del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría



13
00073/17

FOLIO
Nº 6

DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPÚBLICA ARGENTINA

Legal y Técnica, nutriendo a este Programa con la información que recoja de los otros Programas que se han señalada párrafos arriba.

Que dicho *Programa* será llevado adelante en el marco de la actuación Nº 13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que correspondan.

Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las actividades de difusión y promoción del “*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*”.

Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por artículo 6º inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución Nº 0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase el “*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*”.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del referido Programa:

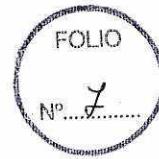
1. La dirección y supervisión general del *Programa* queda a cargo del Subsecretario General.

2. Que el *Programa* tiene por finalidad: **a.** Establecer un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los derechos humanos; **b.** Promover y proteger los derechos humanos estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y **c.** Cooperar con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.

3. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución, y la relación con las INDHs queda a cargo de la Asesoría Legal y Técnica, con la activa participación de la Oficina de Jurisprudencia y Documentación, nutriendo a este *Programa*, entre otras, con la información que recoja de los otros *Programas* que se han referido párrafos arriba.

4. Que dicho *Programa* será llevado adelante en el marco de la actuación N° 13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que correspondan.

5. Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las actividades de difusión y promoción del “*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*”.



**DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA**

ARTÍCULO 3º.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país, nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los requerimientos que les sean formulados en el marco del *"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"*, en función de los principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, a participar, cooperar y colaborar de manera directa con el desarrollo del *"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"*.

ARTÍCULO 5º.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Ministerio de Hacienda de la Nación, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del GANHRI, de la CEPAL, y de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN DPA N°

00073717

Dr. JUAN JOSÉ BÖCKEL
SUBSECRETARIO GENERAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACIÓN

OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development



Buenos Aires, December 20, 2017

HAVING REGARD TO the decisions A/HRX/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/HRC/RES/33/L.17Rev. 1, of the United Nations, and Res. No. 1992754, reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993. as well as The Edinburgh Declaration, approved on October 10, 2010, in the 10th International Conference, by the International Coordinating Committee of the National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, and the A/HRC/RES/17/4, of the UN Human Rights Council, among many others;

WHEREAS,

That this Institution created on December 30, 2015 the "Monitoring and Evaluation Program of the Sustainable Development Goals. 2030 Agenda ", in order to collaborate with the United Nations and with the public authorities of our country to achieve compliance with the 169 goals of that Agenda, by the National State.

That, the purpose of the Program is to carry out, periodically, a follow-up and evaluation of the national public policies that are carried out before 2030, collaborating with the preparation of annual reports.

That, in this sense, on January 25, 2017, the "**Monitoring and Evaluation Program of the Universal Periodic Review**" was created to fulfill what the Human Rights Council points out in point 17 of Res. A/HRC/33/L.17/ Rev.1: "*Recognizes the important role played by national human rights institutions in the Human Rights Council, including its universal periodic review mechanism, both in the preparation phase and in the follow-up phase, and special procedures, as well as their collaboration with human rights treaty bodies in accordance with General Assembly resolutions 60/251, of March 15, 2006, and 65/281, of June 17, 2011 , resolutions of the Human Rights Council 5/1 and 5/2, of June 18, 2007, and 19/119, of March 22, 2012, and resolution 2005/74 of the Human Rights Commission, of 20 April 2005*".

That, in turn, on March 28, 2017, the "**GANHRI Working Group on the Agenda 2030 for the Sustainable Development Goals**" (Global Alliance of National Human Rights Institutions, that is, the Global Alliance of Institutions of Human Rights) was created.

That, in order to comply with all these commitments, our NHRI created a series of Programs that nourish and link each other with the results that are obtained and then be informed to national public authorities and international organizations.

That on February 3, 2017, the "**Program on Business and Human Rights**" was created.

That on June 26, 2017, the "**Health and Human Rights Program**" was created.

That on June 30, 2017, the "**Environment and Human Rights Program**" was created.

That, in light of the above, links were particularly strengthened with the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and with the United Nations Development Program (UNDP), and with other UN agencies.

That this way, and in exercise of the own competences of this Ombudsman, according to the effective laws, the mission imposed by the article 86 of the National Constitution and by virtue of the mandate that is recognized him according to the "Principles of Paris" adopted by the Commission of Human Rights by Res. No. 1992/54 reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993, our Institution, as NHRI, participates in its own right throughout the system of promotion and protection of rights and freedoms fundamental universally recognized in the International Bill of Human Rights and other international treaties and conventions.

That the dynamics of the Programs showed that the creation of each one of them allowed us, as a National Institution of Human Rights (NHRI), to give a strategic framework to follow-up and evaluation of public policies, with fruitful results for both, in benefit of all the people that inhabit our country.

That the Resol. A/RES/48/134 of the General Assembly, recalls that the Vienna Declaration and Program of Action, adopted at the World Conference on Human Rights, reaffirmed the important role of NHRIs, in particular with regard to its

ability to advise the authorities and their role in repairing human rights violations. In that Vienna Declaration and Program of Action, Resol. A/CONF157/23 (1993), it was stated: "**100 ... National human rights institutions, as well as non-governmental organizations, may submit to the Secretary-General of the United Nations** their views on the progress made in the implementation of the present Declaration. Special attention should be given to the evaluation of the progress made in achieving the goal of universal ratification of international human rights treaties and protocols adopted within the framework of the United Nations system." Argentina adopted and ratified the Vienna Declaration and Program of Action.

That, in this context, it is decided to create the "**OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development**", based on the guidelines indicated below.

That Argentina adhered to the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises of the OECD in 1997, which is why our country is a signatory to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, which are part of that instrument.

That the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (LDEM) are recommendations addressed by governments to multinational companies that operate in acceding countries or that have their headquarters in them, and that although they are not binding, constitute the only code of conduct responsible, comprehensive and multilaterally agreed, that governments have committed to promote.

That on May 4, 2010, the governments of the acceding countries of the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises began to negotiate the updating of the Guidelines for Multinational Enterprises of the OECD; and as a result of this process, it was agreed to incorporate new subjects, ordered in successive chapters, which correspond to human rights, employment and labor relations, gender equality, education, environment, fight against corruption, consumer interests, science and technology, competition, taxation and publication of information.

That for the fulfillment of its objectives, the governments committed to establish National Contact Points (NCP) with the mission of promoting the Guidelines and acting as a discussion forum for all matters related to them, also carrying out promotional activities, attending consultations and contributing to the resolution of issues that arise in relation to the implementation of the Guidelines in specific instances.

That, in this framework, by Resolution No. 17 dated January 25, 2013, the Ministry of Foreign Affairs and Worship established as functions of the National Contact Point "*to promote the validity of the Organization's Guidelines for Cooperation and Economic Development (OECD) for Multinational Companies and contribute to the resolution of matters related to their implementation.*"

That the aforementioned Resolution established that the OECD National Contact Point functioned within the scope of the Directorate of Multilateral Economic Affairs, under the National Directorate of Multilateral Economic Negotiations, of the Undersecretariat of International Economic Negotiations, of the Foreign Ministry.

That the aforementioned Directorate is also responsible for intervening in the issue of corporate social responsibility, within the framework of the aforementioned Guidelines.

That the Human Rights Council of the UN in point 6 of its Resolution 17/4 of July 6, 2011 (A/HRC/RES/17/4), established a working group on the issue of human rights and transnational corporations and other companies, so that, *inter alia*: "h) Establish a systematic dialogue and analyze possible areas of cooperation with governments and all relevant stakeholders, including United Nations bodies, specialized agencies, funds and programs, such as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Global Compact, the International Labor Organization, the World Bank and its International Finance Corporation, the United Nations Development Program and the United Nations Development Program. International Organization for Migration, as well as with transnational corporations and other companies, national human rights institutions, representatives of indigenous peoples genas, organizations of civil society and other regional and subregional organizations.. "

That, given their importance, at least other resolutions of the United Nations deserve to be cited; for example, A/HRC/32/45, of May 4, 2016; A/HRC/35/33, of April 24, 2017; A/HRC/35/33, of April 25, 2017; and A/72/162 *, of July 18, 2017; as well as the recommendations made on June 30, 2017, by the working group on the issue of human rights and business, in relation to the 2030 Agenda.

That, it is insisted with the indicated thing opportunely, as far as our Institution created the Program on the companies and the human rights, taking into account, among other observations, the Joint Work elaborated by the Institute of Human Rights of Denmark, in representation of the Human Rights Working Group of the International Coordinating Committee (now GANHRI), in collaboration with the Secretariat of the OECD Guidelines and with contributions from the Canadian Human Rights Commission.

That, there is indicated: "*The PNC provide an important forum for communication and to address issues related to the responsibilities of companies in the field of human rights. NHRIs and other interested parties, including the NCPs themselves, can cooperate to ensure access to remedies when complaints filed with NCPs allege violations of human rights by companies.*"

That, he adds: "*In October 2010, NHRIs adopted the Edinburgh Declaration on Business and Human Rights. This Declaration clearly establishes the joint commitment made by the NHRIs to promote a better understanding and greater respect for human rights in commercial operations. In particular, the Declaration encourages NHRIs to consider partnerships between NHRIs and local networks of the Global Compact, as well as to establish links with governments, businesses and civil society.*"

That, on the other hand, he understands that "NCPs meet periodically to exchange experiences and report to the OECD Investment Committee. This offers NCPs an opportunity to present annual reports; discuss activities to promote the Guidelines in the proactive agenda; participate in peer learning assessments; compare lessons learned on specific issues; strengthen collaborative efforts and hold consultations with representatives of companies, unions, NGOs, international organizations and INDH. "

That, besides the foregoing, and as background, it is of the case to highlight that in 2012, the OECD and the CIC (reiterated, now GANHRI) signed a Memorandum of Understanding in Amman, Jordan, within the framework of the XI Biennial Conference of the CIC.

That the purpose of the Memorandum of Understanding was to establish a cooperation program to promote understanding, visibility and use of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises along with the Mandate of the Paris Principles of NHRIs, in favor of a greater respect for human rights in the field of business activities.

That the Memorandum provided: "*This includes the use of synergies between the OECD and the NCPs, on the one hand, and the CIC and the NHRIs, on the other, for example, through: reference to instruments, functions and the relevant work mutual; joint participation in events of global relationship; the exchange of experiences and capacity building between NCPs and NHRIs; specialized knowledge on human rights and due diligence and continuous dialogue.*"

That there is no doubt that NCPs and NHRIs can have complementary knowledge relevant to the promotion of respect for human rights by companies, taking into account that NCPs are responsible for the OECD Guidelines and the application of provisions related to human rights.

That the aforementioned Memorandum gives an account of a series of positive actions that NHRIs and NCPs should take forward in order to comply with the OECD Guidelines, namely:

a. "*NHRIs from the State of origin can contribute to the actions of the NCPs to promote national learning among companies and other interested parties on the OECD Guidelines. Some NHRIs are experts in specific business and human rights issues; an example is the assessment of the impact on human rights, the elimination of discrimination in the workplace, socially responsible public procurement and labor rights. Maintaining a regular dialogue between NCPs and NHRIs can promote the exchange of relevant information to define due diligence in specific contexts. The NCPs are currently actively involved in the "proactive agenda" projects of the OECD*

Investment Committee on due diligence in the financial sector and the participation of stakeholders in the extractive industry."

b. *"NHRIs may have legal powers in their countries to process complaints, act as a mediation and conciliation body or to investigate complaints of human rights violations, according to the laws by virtue of which they were created. The NCPs and NHRIs should be aware of their mutual mandates on the handling of complaints and examine the coordination of their activities."*

c. *"NHRIs and NCPs can, therefore, collaborate with each other to develop platforms that provide information, publications and tools on business and human rights issues for companies and other interested parties. Likewise, they can jointly organize public events to stimulate awareness and commitment among companies and communities regarding sustainability."*

It is of great interest to note that the Danish Institute for Human Rights (DIHR) is the national human rights institution of Denmark, and in 2011, during the appearance of Denmark in the First Cycle of the Universal Periodic Review (UPR) before the UN Human Rights Council, recommended that his country review the agreements concerning the NCPs and "*ensure that the Danish NCP met all the main criteria of the NCPs in accordance with the OECD Guidelines, and all the criteria of the non-judicial complaints mechanisms according to the Proposed Draft of the Guiding Principles on Business and Human Rights of the UN*".

That, in turn, the Recommendation of the OECD Council on Public Integrity, asks member and non-member countries to enable effective accountability; and in point 12, expressly indicates that the role of external supervision and control in the integrity system of the public sector should be reinforced, specifically: "*a) facilitating organizational learning and guaranteeing the rendering of accounts of the entities of the sector public by providing appropriate responses (including by applying corrective measures, where appropriate) to sanctions, decisions and formal advice from supervisory bodies (such as senior audit bodies, the ombudsman or information commissions), regulatory bodies and application and administrative courts."*

That, the Plan was structured around 3 main categories: "*increase participation in the OECD Committees; adhere to key instruments of the organization; carry out public policy studies.*"

That, in the present, Argentina participates in different organs of the OECD, with a different degree of institutionality, such as: the Fiscal Affairs Committee, the Trade Committee, the Committee on Agriculture, the Committee on Fisheries, the Policy Committee in Science and Technology, the Development Center, the Working Group on Bribery, the Investment Committee, among others.

That Argentina currently awaits the formal invitation of the OECD, honoring the commitments assumed and committed for the coming years, in order to achieve the final approval of its entry by the 35 countries that are currently members of the OECD.

That recently the National Executive Branch presented the so-called First National Plan of Action on Human Rights (2017-2020), and its axis No. 5 "Civic Culture and Commitment to Human Rights", more precisely in point 5.6. "Human Rights and Businesses", states that the Ministry of Justice and Human Rights will contribute "*to the design and implementation ... of guidelines and protocols of action within the framework of international instruments such as the Guiding Principles of Business and Human Rights and the Guidelines of the OECD, with special attention to groups in situations of vulnerability.*", with the goal of preparing and implementing five (5) protocols and guidelines for action.

That, therefore, the "**OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development**", will aim to: **a.** Establish a cooperation program to promote greater understanding, visibility and use of the OECD Guidelines between the Argentine National Contact Point and the Paris Principles Mandate that governs our NHRI, in pursuit of greater respect for human rights; **b.** Promote and protect human rights closely linked to the OECD Guidelines, through instruments and work on relevant initiatives, communications and publications; and **c.** Cooperate with other NRIs in the coordination of good working practices, exchanging experiences, information, preparing proposals, and supporting the implementation processes of the OECD Guidelines.

That the general direction and supervision of the *Program* will be the responsibility of the Deputy Secretary General; and, the link, regarding the monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, is in charge of the Legal and Technical Advice Area, feeding this Program with the information that it collects from the other Programs that have been indicated above.

That said *Program* was implemented within the framework of action No. 13.330/17, and that it is included here to provide all the necessary data for the pertinent opportunity, and the necessary background information for the national authorities and the corresponding international organizations.

That the Communication Area will be in charge of developing the dissemination and promotion activities of the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*".

That the Legal and Technical Area has expressed its appropriate legal opinion;

That this Resolution is adopted in compliance with section 6, paragraph j) of the Regulations for the Organization and Functioning of the Ombudsman Office, the authorization given by the two Presidents of the largest political parties represented in Parliament, and, in addition, ratified by Res. N° 001/2014 of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, , dated 23 April 2014, and the President's note of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, dated 25 August 2015, which conferred the same powers granted to the Secretary General in the person of the Deputy Secretary General, in case the Secretary General be on leave or absent.

NOW, THEREFORE, as Deputy Secretary General of the Ombudsman Office, it is hereby ordered as follows:

ARTICLE 1.- Create the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*".

ARTICLE 2.- Approve the following work methodology within the framework of the aforementioned Program:

1. The overall direction and supervision of the Program is the responsibility of the Deputy Secretary General.

2. The purpose of the *Program* is: **a.** Establish a cooperation program to promote greater understanding, visibility and use of the OECD Guidelines between the Argentine National Contact Point and the Paris Principles Mandate that governs our NHRI, in pursuit of greater respect for human rights; **b.** Promote and protect human rights closely linked to the OECD Guidelines, through instruments and work on relevant initiatives, communications and publications; and **c.** Cooperate with other NRIs in the coordination of good working practices, exchanging experiences, information, preparing proposals, and supporting the implementation processes of the OECD Guidelines.

3. The link, in terms of monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, and the relationship with the NRIs, is in charge of the Legal and Technical Area, with the active participation of the Office of Jurisprudence and Documentation, nurturing this Program, among others, with the information it collects from the other Programs that have been referred to above.

4. That the *Program* will be carried out in the framework of action No. 13.330/17, and there will be added all the necessary information for the relevant opportunity, and the results will be reported to the national public authorities and international organizations which correspond.

5. That the Communication Area will be in charge of developing the dissemination and promotion activities of the "OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development".

ARTICLE 3.- To urge all public authorities of our country, national, provincial and municipal, to collaborate with the Office of the Ombudsman of the Nation, in its capacity as a National Human Rights Institution, with the requirements formulated in the framework of the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*", based on the principles recognized by the Alliance for Open Government and good governance practices.

ARTICLE 4.- Invite civil society as a whole, to participate, cooperate and collaborate directly with the development of the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*".

ARTICLE 5.- To put the contents of this resolution in the knowledge of the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the Nation, of the Ministry of Finance of the Nation, of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), of the Program of the Nations United for Development (UNDP), in this case through its offices located in the Autonomous City of Buenos Aires, GANHRI, ECLAC, and the Permanent Bicameral Commission of the Ombudsman's Office.

ARTICLE 6.- Be duly notified, recorded and filed.